

EXPEDIENTE 3380-2007

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, doce de diciembre de dos mil siete.

Por inhibitoria del Magistrado Titular Juan Francisco Flores Juárez, se integra este Tribunal con el Magistrado Suplente José Rolando Quesada Fernández, para conocer y resolver en el presente asunto. Artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

MARIO PÉREZ GUERRA
PRESIDENTE

GLADYS CHACÓN CORADO
MAGISTRADA

ROBERTO MOLINA BARRETO
MAGISTRADO

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE
MAGISTRADO

JOSÉ ROLANDO QUESADA FERNÁNDEZ
MAGISTRADO

MARTÍN RAMÓN GUZMAN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL



IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE HAY SOLO VEINTICUATRO HORAS PARA SOLICITAR SE ACLARE Y SE AMPLÍE, VENCE MAÑANA A LAS 4:00 -6GTM

EXPEDIENTE 3380-2007

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, doce de diciembre de dos mil siete.

En apelación, y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007), dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, que resuelve las acciones constitucionales acumuladas promovidas por Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo contra el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Los postulantes actuaron con el patrocinio de los abogados José Gudiel Toledo Paz y Jorge Alejandro Pinto Ruiz, el primero, y de Joel García García, el segundo.

ANTECEDENTES

I. LOS AMPAROS:

A) Interposición y autoridad: (i) *Ángel Aníbal Guevara Rodríguez* presentó la acción el veinte (20) de noviembre de dos mil seis (2006), en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, expediente registrado bajo el número ochenta y siete – dos mil seis (87-2006); (ii) *Pedro García Arredondo*, el veintitrés (23) de diciembre de dos mil seis (2006), en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, expediente registrado bajo el número quinientos cuarenta y tres – dos mil seis (543-2006), acumulado el diecisiete (17) de enero del año en curso al expediente anteriormente descrito. **B) Acto reclamado:** en ambas acciones se denunció como acto reclamado el auto de seis (6) de noviembre de dos mil seis (2006), dictado por el Tribunal Quinto de

Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente [autoridad impugnada] en el que se ordenó la detención provisional de Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Pedro García Arredondo, Óscar Humberto Mejía Vítores y Germán Chupina Barahona, dentro de la solicitud de detención provisional, previo a formalizar extradición, requerida por el Reino de España contra las personas mencionadas, por los delitos de Terrorismo, Homicidio y Secuestro, dentro del expediente identificado como *extradición dos – dos mil seis (2-2006)*. C) **Violaciones que denuncian:** a los derechos de libertad de acción, a una detención legal y al derecho de defensa; a los principios jurídicos de legalidad y de exclusividad y de independencia de la función jurisdiccional de los tribunales de Guatemala. **D) Hechos que motivan el amparo:** de lo expuesto por los postulantes y del estudio de las constancias procesales se resume: **D.1) Ángel Aníbal Guevara Rodríguez:** a) el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente recibió el expediente remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que contiene la solicitud requerida por el Reino de España de detención provisional, con fines de extradición, contra José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Óscar Humberto Mejía Vítores, Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo por los delitos de Terrorismo, Homicidio y Secuestro; b) la *autoridad impugnada* en resolución de seis (6) de noviembre de dos mil seis (2006) ordenó, bajo responsabilidad del Reino de España, la detención provisional de los postulantes y de las otras personas, previo a la solicitud de extradición, con excepción de José Efraín Ríos Montt. El postulante manifestó que al emitir el acto reclamado la autoridad impugnada conculca sus derechos de libertad de acción, a una detención legal y de defensa, así como los principios de legalidad, de exclusividad y de

1 independencia de la función jurisdiccional de los tribunales de Guatemala porque
2 a pesar de lo establecido claramente por la Constitución Política de la República
3 de Guatemala y el Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de
4 Guatemala y el Reino de España, el Tribunal reclamado ordenó su detención
5 provisional incurriendo en las ilegalidades siguientes: i) se omitió calificar la
6 competencia del Tribunal que la solicitó, obligación que debió cumplir de oficio ya
7 que, de haberlo hecho, pudo haber advertido no sólo la falta de una orden de juez
8 competente, sino también la inexistencia de peligro de fuga para dictar la prisión
9 provisional; ii) se inobservó lo estipulado en el artículo 56 del Código Procesal
10 Penal que faculta a los jueces penales para examinar de oficio su propia
11 competencia y el artículo 296 de dicho cuerpo legal que establece que la cuestión
12 de incompetencia debe ser resuelta antes que cualquier otro asunto; iii) de
13 acuerdo al tratado de extradición mencionado el Estado de Guatemala no tiene
14 obligación ni compromiso alguno de entregar a los guatemaltecos requeridos por
15 el Gobierno de España, como tampoco España tendría la obligación de entregar a
16 Guatemala ninguno de sus súbditos, cuando el delito no fue cometido en el
17 territorio del Estado que lo solicita, ya que el Tratado se refiere exclusivamente a
18 la extradición de quienes se refugian en el otro Estado, y en su caso, el ahora
19 postulante de amparo no puede ser refugiado en su propia patria, donde ha vivido
20 siempre; por ello, la *autoridad impugnada* actuó ilegítimamente al acatar una
21 orden de detención proveniente de un Juez español que no es autoridad
22 competente en la República de Guatemala para dictar tal medida restrictiva de la
23 libertad; iv) el Tribunal Quinto de Sentencia impugnado, al ordenar su detención
24 provisional "*bajo la responsabilidad del Reino de España*", atentó contra la
25 independencia del Organismo Judicial al permitir que un juez foráneo, sometido a



la jurisdicción de otro país y sin competencia para actuar en Guatemala, imparta órdenes jurisdiccionales que solamente compete a los tribunales guatemaltecos, porque ninguna ley nacional le otorga esas facultades al Juez español. El postulante solicitó que se otorgue amparo y en consecuencia, que se suspenda en forma definitiva el acto reclamado y que se ordene a la autoridad impugnada suspender la validez del auto causante de agravio y ordene su libertad. D.2)

Pedro García Arredondo indicó que la autoridad impugnada, al dictar el acto reclamado, violó los derechos a una detención legal, de defensa, así como los principios de legalidad y de exclusividad e independencia de la función jurisdiccional de los tribunales de Guatemala porque: i) dicha autoridad no calificó de oficio la competencia del Juez que emitió la orden de detención, condición fundamental para la aplicación del Tratado de Extradición, contraviniendo el artículo 6º de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente, pues un Juez español no tiene competencia para dictar órdenes de aprehensión en Guatemala, porque ello constituye una flagrante violación a la soberanía nacional; ii) en el Tratado de Extradición suscrito entre los Gobiernos de Guatemala y España, se pactó que ninguna de las dos partes estaría obligada a entregar a la otra a sus propios ciudadanos, cuando el delito ha sido cometido dentro de su territorio; iii) la autoridad reclamada obedeció una orden de un Juez extranjero emitida sin fundamento fáctico y jurídico, que no individualiza hechos, sólo se tipifican delitos que supuestamente se cometieron en el territorio nacional en los años mil novecientos setenta y ocho (1978) y mil novecientos ochenta (1980), sin indicar en qué lugar, a qué hora, de qué modo, en qué circunstancias y

1 en qué grado de participación. Solicitó que se le otorgue amparo, que se le
2 restablezca en el goce de sus derechos conculcados y que se hagan las demás
3 declaraciones pertinentes. E) **Uso de recursos:** Pedro García Arredondo
4 interpuso reposición. F) **Caso de procedencia:** a) Ángel Aníbal Guevara
5 Rodríguez citó el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
6 Constitucionalidad. b) Pedro García Arredondo invocó los contenidos en los
7 incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
8 Constitucionalidad. G) **Leyes violadas:** citaron los artículos 5º, 6º, 12, 17 y 203 de
9 la Constitución Política de la República de Guatemala; I, III, IV, IX, XI del Tratado
10 de Extradición suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de España
11 el siete (7) de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco (1895) y aprobado
12 mediante el Decreto Legislativo trescientos cincuenta y siete (357) de diecinueve
13 (19) de abril de mil ochocientos noventa y siete (1987); 56 y 296 del Código
14 Procesal Penal.

15 II. TRÁMITE DEL AMPARO

16 A) **Amparo provisional:** a) Al postulante, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez,
17 dentro del expediente tres mil doscientos sesenta – dos mil seis (3260-2006) se le
18 otorgó la protección interina por la Corte de Constitucionalidad, en auto de treinta
19 (30) de noviembre de dos mil seis (2006), para que el Tribunal Quinto de
20 Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente determinara, como
21 fundamento de la orden de prisión decretada, si la Constitución Política de la
22 República de Guatemala, los Tratados o Convenciones internacionales ratificados
23 por Guatemala o las leyes del país, le reconocían competencia excluyente al
24 Estado requirente para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado sobre hechos
25 delictuosos de naturaleza penal ocurridos en el territorio de la República de



Guatemala; y en caso de no haberlo, resolviera conforme a Derecho. En virtud del incumplimiento en la ejecución del amparo provisional decretado por esta Corte, se reiteró su realización mediante las resoluciones siguientes: a') auto de nueve (9) de marzo de dos mil siete, dictado dentro del expediente doscientos veinte – dos mil siete (220-2007) por la Corte de Constitucionalidad en el cual, al resolver el ocurso en queja interpuesto por el postulante, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, se conminó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente a que cumpliera con lo ordenado por esta Corte en el expediente tres mil doscientos sesenta – dos mil seis (3260-2006), considerando que *“la ejecución del amparo provisional, como providencia cautelar dictada por el órgano de control constitucional a favor del amparista, se rige por las prescripciones del artículo 129, literal b), de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad el cual establece que el tribunal que conoce de la inconstitucionalidad en caso concreto podrá seguir conociendo de las providencias cautelares; en el caso concreto, la autoridad judicial recurrida debió cumplir con la ejecución del amparo provisional decretado por esta Corte pues se encontraba legalmente obligada para ello”; a’’) auto de dieciocho (18) julio de dos mil siete (2007), dictado por esta Corte dentro del expediente mil setecientos ochenta y nueve – dos mil siete (1789-2007), en el cual Ángel Aníbal Guevara Rodríguez denunció, por medio ocurso en queja, la negativa de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, de propiciar la debida ejecución del amparo provisional que esta Corte le otorgara al postulante en auto de treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006); en esta segunda oportunidad, esta Corte ordenó: i. la **anulación** de la resolución dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el*

1 Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en que se denegaba la ejecución
2 del amparo provisional; *II.* que la autoridad ocursoada, en ejecución del amparo
3 provisional otorgado, fijara plazo de cuarenta y ocho horas al Tribunal Quinto de
4 Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, para que emitiera
5 la determinación ordenada en el auto precitado [de amparo provisional]. **b)** Al
6 accionante, Pedro García Arredondo, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones
7 del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente le otorgó el amparo
8 provisional en auto de veintiocho (28) de diciembre de dos mil seis (2006). **B)**
9 **Terceros interesados:** Oscar Humberto Mejía Vítores, José Efraín Ríos Montt y
10 Germán Chupina Barahona; Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Casos
11 Especiales y Violaciones a los Derechos Humanos y Fiscalía de Asuntos
12 Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal; y Rigoberta Menchú Tum. **C)**
13 **Informe circunstanciado:** la *autoridad impugnada* informó: **a)** el treinta y uno
14 (31) de octubre de dos mil seis (2006), ese Tribunal recibió de la Secretaría de la
15 Corte Suprema de Justicia, un expediente remitido por el Ministerio de Relaciones
16 Exteriores que contiene la solicitud del Reino de España de detención provisional,
17 previo a formalizar la extradición, contra José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal
18 Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Oscar Humberto Mejía Vítores
19 y Pedro García Arredondo; **b)** emitió la resolución de seis (6) de noviembre de dos
20 mil seis (2006) en la cual declaró "*I) Bajo la responsabilidad del Reino de España, se*
21 *ordena la detención provisional de PEDRO GARCÍA ARREDONDO, ÓSCAR*
22 *HUMBERTO MEJÍA VÍTORES, GERMAN CHUPINA BARAHONA y ÁNGEL ANÍBAL*
23 *GUEVARA RODRÍGUEZ, por los delitos de TERRORISMO, HOMICIDIO Y*
24 *SECUESTRO, previo a la solicitud formal de extradición; II) Oficiase a la Dirección*
25 *General de la Policía Nacional Civil para que se haga efectiva esta medida; III) No ha*



[Handwritten signature]

lugar a ordenar la detención provisional de JOSE EFRAÍN RÍOS MONTT; IV) Por el conducto correspondiente, infórmese al Reino de España lo resuelto; V) Hágase saber el contenido de la solicitud y de la presente resolución al Ministerio Público y al Ministerio de Relaciones Exteriores"; c) el veintiuno (21) de noviembre de dos mil seis (2006), ese Tribunal declaró sin lugar el recurso de reposición planteado por Pedro García Arredondo contra el acto reclamado; d) el veintitrés (23) de noviembre de ese año, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente recibió la pieza original del expediente de extradición por haber planteado recurso de apelación el abogado defensor de Ángel Anibal Guevara Rodríguez contra la resolución de siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006). **D) Prueba:** fue objeto de valoración el expediente de amparo. **E) Sentencia de primer grado:** el tribunal consideró: "(...) En el presente caso, esta Sala constituida en Tribunal extraordinario de Amparo, al realizar un análisis integral de las actuaciones, considera que no les asiste la razón a los amparistas, toda vez que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala: 'La extradición se rige por lo dispuesto en los tratados internacionales' y en el presente caso, existe un Tratado Internacional vigente entre la República de Guatemala y el Reino de España, suscrito el siete de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco y publicado en el Diario Oficial el diez de junio de mil ochocientos noventa y siete, el cual en su artículo XI del referido Tratado de Extradición signado entre los Estados de Guatemala y España, contempla el caso en el cual el Estado requirente puede solicitar la orden de prisión al Estado requerido, en los casos de supuestos delitos cometidos dentro del territorio de una de las dos partes contratantes; de lo cual se deduce que la referida orden de detención fue emitida conforme a derecho. Ahora, con relación al argumento de los solicitantes, de que

1 el caso suyo no se encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo I del
2 Tratado de Extradición firmado entre Guatemala y España, al manifestar que no han sido
3 condenados ni están siendo perseguidos por las autoridades competentes del Reino de
4 España por no haber cometido delitos en el territorio español y en el segundo caso, por
5 no haberse refugiado ambos en el territorio de ninguna de las altas partes contratantes,
6 ya que expresan que no buscaron refugio ni asilo en Guatemala, por haber residido toda
7 su vida en este país; esta Sala considera que los amparistas realizan una interpretación
8 restrictiva del artículo I del Tratado de Extradición signado entre la República de
9 Guatemala y el Reino de España, toda vez que su caso sí se enmarca en uno de los
10 presupuestos indicados en la referida disposición legal, por razón de que los postulantes
11 están siendo perseguidos por la otra parte contratante, sindicados en un órgano
12 jurisdiccional español de cometer delitos que tienen el carácter de extraditables de
13 conformidad con el relacionado Tratado, y al respecto, esta Sala estima que el supuesto
14 establecido en el artículo I del relacionado Tratado, referente al caso de las personas
15 perseguidas por las autoridades de una de las dos partes contratantes, como autores
16 principales, auxiliares, o cómplices de los delitos a que se hace referencia en el Tratado
17 respectivo, no se refiere con exclusividad a los casos de delitos cometidos dentro de la
18 esfera jurisdiccional del Estado requirente, ya que, en aplicación a los principios
19 generales extraterritorialidad de la ley penal, a los solicitantes se les atribuyen delitos que
20 pueden ser materia de conocimiento por parte de un órgano jurisdiccional de España, al
21 haber sido cometidos contra ciudadanos españoles dentro de su respectiva sede
22 diplomática, y bajo ese contexto, sí pueden ser considerados ilícitos cometidos en el
23 territorio de la parte requirente, ya que de acuerdo al tratadista Alfred Verdross, citado por
24 Jesús Guadalupe Luna Altamirano en su libro: La extradición en México y en otros
25 países, página 103: 'territorio es aquel sobre el cual el Derecho Internacional reconoce a



un Estado la soberanía territorial, y agrega: territorio en sentido amplio abarca la tierra firme sobre la que se asienta el Estado con sus aguas interiores, el fondo del mar y el subsuelo marítimo, permanentemente ocupados, además del mar territorial. Para el derecho internacional, territorio es el espacio terrestre (suelo y subsuelo, el aéreo, los mares (plataforma continental, mar territorial, mar patrimonial), las naves (aéreas y marítimas), y aquel donde se ubican las representaciones diplomáticas de cada país en el extranjero, donde ejerce su soberanía, la cual debe entenderse como el poder de actuación exclusiva que el Estado tiene sobre un territorio, con los únicos límites que el derecho internacional haya fijado'. De lo anteriormente considerado, se deduce que los amparistas realizan una interpretación restrictiva del artículo I del Tratado de Extradición firmado entre la República de Guatemala y el Reino de España, al hacer alusión a que su caso no está contemplado en la referida disposición del citado Tratado, situación que conduce a esta Sala a la convicción de que la autoridad impugnada actuó en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, en consecuencia de lo anterior, se arriba a la conclusión de que no se ha conculcado ningún derecho a los peticionantes del amparo, razón por la cual, la presente acción constitucional de amparo deviene improcedente. (...) En el presente caso, debido a la improcedencia del amparo, por las razones apuntadas, este Tribunal considera obligatoria la condena al pago de las costas causadas a los interponentes, así como la imposición de la respectiva multa de quinientos quetzales a los abogados patrocinantes (sic)". Y resolvió: "I) Deniega el amparo solicitado por ÁNGEL ANÍBAL GUEVARA RODRÍGUEZ y PEDRO GARCÍA ARREDONDO, quienes intervienen en este proceso, bajo la dirección y procuración de los abogados JOSÉ GUDIEL TOLEDO PAZ y JORGE ALEJANDRO PINTO RUIZ (para el primer amparista citado) así como JOEL GARCÍA GARCÍA (para el segundo amparista indicado); II) Condena en costas a los amparistas

1 indicados, e impone multa de quinientos quetzales (Q500.00) a cada uno de los
2 abogados patrocinantes en cuestión".

3 **III. APELACIÓN**

4 José Efraín Ríos Montt, tercero interesado, y Ángel Aníbal Guevara
5 Rodríguez apelaron.

6 **IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA**

7 **A) Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, postulante,** alegó que no comparte con lo
8 estimado por el Tribunal de Amparo de primer grado al denegar el amparo, por las
9 siguientes razones: a) el Tribunal *a quo* resaltó vicio de argumentación en la
10 interpretación restrictiva de los accionantes, apreciación que no es correcta, ya
11 que tiene la obligación de conocer el procedimiento que rige la Constitución
12 Política de la República de Guatemala y la ley de la materia, efectuando una
13 interpretación restrictiva a su favor, especialmente porque se trata de discutir
14 resoluciones que afectan su libertad, como lo ordena el artículo 14 del Código
15 Procesal Penal; b) no efectuó el análisis de las actuaciones toda vez que la
16 autoridad impugnada dictó la resolución que ordena la captura con fundamento en
17 el Tratado de Extradición, aduciendo y acogiendo hechos sucedidos no sólo en la
18 Embajada de España en Guatemala, sino también atribuyendo la muerte de
19 sacerdotes españoles en el departamento de Huehuetenango, territorio de
20 Guatemala, aspecto que no es parte del derecho internacional; c) el acatamiento
21 de una orden de detención proveniente de un Juez español, como en el presente
22 caso, es completamente ilegítima, por no ser una autoridad competente en la
23 República de Guatemala para dictar ese tipo de medidas, conforme a las reglas
24 establecidas en el propio Tratado de Extradición suscrito entre Guatemala y
25 España; d) no puede existir tratado internacional que sea superior o igual



jerárquicamente a la Constitución; y e) el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, al emitir el acto reclamado, le causó un daño consumado de manera permanente pues se le privó de libertad personal violándole los derechos de defensa, de declarar y de que se resuelva su situación jurídica; se dictó el auto de detención sin existir peligro de fuga, ya que él se presentó en forma voluntaria ante las autoridades policiacas. De ahí que se contraviene la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes ordinarias del país. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación, revocándose la sentencia apelada, se le otorgue el amparo y como consecuencia, se suspenda el acto reclamado, ordenándose a la autoridad impugnada que le restablezca los derechos conculcados y ordene su inmediata libertad. **B) José Efraín Ríos Montt, tercero interesado,** manifestó que son los tribunales guatemaltecos los únicos competentes para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado en relación a los delitos ocurridos en territorio guatemalteco y que si bien es cierto existe un Tratado de Extradición suscrito entre Guatemala y España, el espíritu del mismo es que un país entregue al otro a los nacionales que hayan delinquido en uno de tales Estados (el requirente) y se haya refugiado en el otro (el requerido), pero nunca otorga competencia a un Estado para juzgar hechos acaecidos en el otro, como se pretende en el presente caso. Solicitó que se revoque la sentencia apelada, declarándose con lugar el amparo y se deje sin efecto el acto reclamado. **C) Rigoberta Menchú Tum, tercera interesada,** alegó que: a) en materia judicial, cuando la controversia suscitada ha sido dirimida en observancia de las prescripciones legales, el amparo no debe convertirse en un medio revisor de las resoluciones por el hecho de que no sea conforme con las pretensiones del postulante, no sólo por la naturaleza subsidiaria y extraordinaria

1 del amparo, sino también porque, si la autoridad impugnada ha actuado en el
2 ejercicio correcto de las facultades que le confiere la ley, no existe agravio
3 reparable por esta vía; b) al redactar el texto constitucional, el legislador
4 constituyente, en ejercicio de la soberanía que le fuera delegada decidió plasmar
5 en el artículo 27 constitucional la autorización para extraditar a guatemaltecos
6 señalados de graves ilícitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional.

7 En este orden de ideas, para cumplir con el texto constitucional es requisito previo
8 la captura y detención bajo la responsabilidad del país requirente; c) la orden de
9 detención con fines de extradición se basó en un tratado internacional eficaz y
10 vigente con España, obligatorio en todas y cada una de sus disposiciones. No
11 debe lesionarse el principio *pacta sun servanda* ni eludir las obligaciones
12 asumidas por el Estado de Guatemala para cooperar en la pronta y cumplida
13 justicia, no sólo dentro de sus fronteras, sino por aquellos Estados con los que
14 mantiene relaciones diplomáticas, consulares y de cooperación, a los cuales
15 reconoce y debe reciprocidad, como es el caso de España; d) los amparistas
16 incurren en equívoco grave al señalar que se está violando la soberanía del
17 Estado de Guatemala, y que se está dando un abuso de autoridad. Es la
18 expresión de la soberanía misma de los Estados que como sujetos de derecho
19 internacional se reconocen la calidad de "soberanos" a brindarse cooperación en
20 asuntos que trascienden las fronteras, dentro del marco del derecho internacional,
21 reconocido por la Constitución; e) ordenarse a la autoridad impugnada que
22 analice la competencia del funcionario del poder judicial del país requirente,
23 implicaría irrespetar la soberanía de España, ya que no sería procedente que un
24 tribunal en el ejercicio de una función meramente administrativa, tramitadora de
25 un expediente de extradición, se avoque el cuestionamiento del fondo de una

causa que se está tramitando por el Poder Judicial de otro Estado soberano. Ya
se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad al respecto, indicando que en la
extradición "...no compete a los Tribunales analizar el fondo del asunto y resolver sobre
si está o no demostrada la comisión del delito, y si el sujeto requerido es culpable o no;
es decir, no se trata de conocer y juzgar a un procesado, pues ello corresponderá al juez
del país requirente." Expediente ciento treinta y siete – noventa y dos (137-92)
sentencia de diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993); f)
los solicitantes de amparo se acogen indebidamente a que no tienen la condición
de refugiados o de que hayan buscado asilo en su propio país para eludir la
persecución del Estado contraparte en el Tratado de Extradición; g) la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad debe ser interpretada de
manera extensiva para lograr la protección eficaz de los derechos
constitucionales. Ante la ausencia de prohibición legal expresa y el
reconocimiento de la extradición en el artículo 27, de las relaciones entre Estados
soberanos recogido en el artículo 149 y de lo preceptuado por el artículo 44, todos
ellos de la Constitución Política de la República de Guatemala, debe confirmarse
la sentencia que en apelación impugnan los postulantes, ya que no se les ha
causado agravio alguno con la emisión del acto reclamado. Solicitó que se
declare sin lugar los recursos de apelación presentados y se confirme el fallo
apelado. D) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Casos
Especiales y Violaciones a los Derechos Humanos y la Fiscalía de Asuntos
Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal manifestó su conformidad
con lo considerado y resuelto por el Tribunal a quo y agregó que: (i) la autoridad
reclamada basó su actuación en la existencia del Tratado de Extradición, por lo

1 denegación del amparo fue procedente; y (ii) los postulantes consintieron el acto
2 reclamado ya que no hicieron uso del recurso de apelación que la ley les otorga
3 para impugnar la resolución que según ellos les afecta, incumpliendo con el
4 principio de definitividad que se refiere a que previo a acudir al amparo deben
5 agotarse los recursos de conformidad con el principio del debido proceso. Solicitó
6 que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia venida
7 en grado.

8 **CONSIDERANDO**

9 - I -

10 Guatemala es un Estado constitucional de Derecho, democrático y social.
11 Para alcanzar su desarrollo político y el cumplimiento de sus fines cuenta con
12 instituciones apropiadas, entre ellas, la Corte de Constitucionalidad que tiene
13 como función esencial la defensa del orden constitucional. Los habitantes de la
14 República pueden acudir a su tutela en protección de los derechos que la
15 Constitución y las leyes les reconocen.

16 - II -

17 Elevados los autos a este Tribunal por el recurso de apelación interpuesto
18 por los solicitantes de amparo, en los expedientes ya identificados, contra la
19 sentencia dictada por la Sala que en primera instancia conoció del caso, se
20 resume la cuestión jurídica en determinar el atributo de competencia de los
21 tribunales del Reino de España respecto de los supuestos hechos de carácter
22 delictivo sindicados a los amparistas y a otros ciudadanos guatemaltecos de
23 origen y residentes en el territorio de la República de Guatemala, sucesos que
24 también se señalan ocurridos en esta circunscripción territorial.

25 Del resultado de esa determinación dependería entender y decidir también



6 con relación a la vulneración del derecho a un debido proceso, en la básica
7 especificidad del derecho al juez natural que, por su naturaleza fundamental y por
8 encontrarse protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala y
9 varios instrumentos internacionales de los Derechos Humanos, concierne a esta
0 Corte examinar como elemento clave de su competencia en materia de amparo
1 constitucional.

2 - III -

3 El amparo, en expedientes acumulados, interpuesto por cada parte,
4 concluyó en la primera instancia con su denegatoria, sosteniendo la Sala apelada
5 en su *Considerando II*, que la competencia de los tribunales del Reino de España
6 resultaba de: a) el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución Política de la
7 República de Guatemala establece que la extradición se rige por lo dispuesto en
8 los tratados internacionales; b) que existe vigente un Tratado Internacional entre
9 la República de Guatemala y el Reino de España; c) *"en su artículo XI del referido*
0 *Tratado (...) contempla el caso en el cual el Estado requirente puede solicitar la orden de*
1 *prisión al Estado requerido, en los casos de supuestos delitos cometidos dentro del*
2 *territorio de una de las dos partes contratantes, de lo cual se deduce que la referida*
3 *orden de detención fue emitida conforme a derecho"* [el resaltado es propio del
4 texto original]; d) que, frente al argumento de los amparistas de que no han
5 cometido ningún delito en territorio español y no haberse refugiado ni buscado
6 asilo en Guatemala, por ser habitantes y residentes de su país de origen, ellos –
7 afirma la Sala– *"realizan una interpretación restrictiva del artículo I del Tratado de*
8 *Extradición (...) toda vez que su caso sí se enmarca en uno de los presupuestos*
9 *indicados en la referida disposición legal, por razón de que los postulantes están*
0 *siendo perseguidos por la otra parte contratante, sindicados en un órgano*

1 *jurisdiccional español de cometer delitos que tienen el carácter de extraditables de*
2 *conformidad con el relacionado Tratado" [énfasis propio del texto citado]; e) "que el*
3 *supuesto establecido en el artículo I del relacionado tratado (...) no se refiere con*
4 *exclusividad a los casos de delitos cometidos dentro de la esfera jurisdiccional del*
5 *Estado requirente, ya que, en aplicación a los principios generales de*
6 *extraterritorialidad de la ley penal, a los solicitantes se les atribuyen delitos que pueden*
7 *ser materia de conocimiento por parte de un órgano Jurisdiccional de España, al haber*
8 *sido cometidos contra ciudadanos españoles dentro de su respectiva sede*
9 *diplomática" [el resaltado y subrayado es parte del texto]; f) que la sede*
10 *diplomática española en Guatemala puede considerarse, según una cita*
11 *doctrinaria que hace, como parte de la soberanía territorial de dicho Reino.*

12 - IV -

13 Enmarcada en el Considerando anterior el sustento jurídico de la Sentencia
14 apelada, se hace necesario enfocar los alcances del Tratado de Extradición
15 suscrito por el Estado de Guatemala y el Reino de España, el siete (7) de
16 noviembre de mil ochocientos noventa y cinco (1895), aprobado mediante el
17 Decreto legislativo número trescientos cincuenta y siete (357) del diecinueve (19)
18 de abril de mil ochocientos noventa y siete (1897), en lo sucesivo el "*Tratado de*
19 *Extradición*", con relación al caso concreto planteado que origina la solicitud de
20 extradición formulada por las autoridades del Reino de España de los ciudadanos
21 guatemaltecos impetrantes del amparo.

22 En primer término, aunque dicho Tratado tiene una duración que pasa de
23 una centuria de años, dicha circunstancia de ninguna manera puede restarle su
24 vigor obligante para los Estados Partes. Sin embargo, debe ser objeto de análisis
25 en cuanto las instituciones vigentes en su época y que, por el principio de la



buena fe, eran las que los Estados suscriptores habrían de tener en consideración para obligarse, y debe ser confrontado respecto de las garantías de carácter fundamental que puedan afectar a las personas tanto como las de naturaleza orgánica que preserven los derechos de los Estados a su igualdad soberana.

La petición de extradición se apoya en la aceptación de la jurisdicción española de conocer: 1º Hechos ocurridos en territorio guatemalteco sin discriminar la nacionalidad de las víctimas, fueren nacionales de Guatemala o del Reino de España; 2º Hechos ocurridos en territorio guatemalteco (incluido el interior de la sede diplomática española) vinculados con la nacionalidad española de las víctimas.

1º) Respecto del primero, no existe en el aludido Tratado de Extradición ninguna referencia explícita que permita entender que cualquiera de los dos Estados Partes puede tener competencia para conocer hechos delictivos ocurridos en el territorio soberano de la otra parte.

La lectura integral del Tratado de Extradición permite encontrar diversas indicaciones a la jurisdicción territorial que demuestran que las Partes estaban pactando la entrega de personas que habiendo cometido un delito de los previstos en el mismo en el territorio de uno hubiese buscado asilo en sus respectivos territorios (Preámbulo, segundo párrafo) o refugio en el territorio de la otra (Artículo I *in fine*).

El principio de territorialidad de la ley penal se encuentra recogido además en otras estipulaciones del Tratado: Artículo III inciso 3º, "*si el crimen se hubiere cometido dentro de su jurisdicción*"; Artículo VII primer párrafo: "*el Gobierno requerido podrá, a su elección, entregarlo al país en cuyo territorio hubiere cometido el crimen o delito (...) o al del que el individuo pertenezca*" (En este supuesto, operaría el

1 principio de personalidad o de la nacionalidad). Siempre en el mismo Artículo VII
2 segundo párrafo *in fine*, otra referencia al principio de territorialidad: "lo entregará al
3 país en cuyo territorio hubiere cometido el delito más grave, a juicio del Gobierno que
4 haya de entregarlo". En el Artículo X "mandamiento de prisión en el país en que hubiere
5 cometido el crimen". En el Artículo XX se reguló la posibilidad de perseguir
6 crímenes y delitos cometidos por los ciudadanos de una parte contra las leyes de
7 la otra, no quedando especificado que se trate de un supuesto de extradición sino
8 de la obligación del Estado, en donde el individuo se halle, de juzgarlo por su
9 cuenta. En el segundo párrafo, se dispone la obligación del Estado en donde se
10 haya cometido la ofensa (aspecto territorial) de facilitar los informes y los
11 documentos judiciales relacionados con el cuerpo del delito, lo cual presupone
12 que no hay caso de que un Estado Parte se atribuya competencia para conocer
13 de hechos sucedidos en suelo ajeno y que no vulneren su régimen interno.

14 Disipa el anterior análisis de diferentes elementos del Tratado de
15 Extradición la suposición de que una de las partes pueda exigir la entrega de un
16 ciudadano extraño a su soberanía por hechos delictuosos ocurridos fuera de su
17 ámbito territorial y que no hayan lesionado su sistema penal.

18 La idea de asumir competencia, cuando los hechos hayan ocurrido
19 en el territorio del requirente y que tampoco hayan afectado a sus ciudadanos, no
20 deriva del contenido del Tratado de Extradición, sino del concepto moderno de
21 Jurisdicción Universal, cuestión de la que esta Sentencia se ocupará en otro
22 capítulo de esta parte considerativa.

23 2º) En lo que concierne al segundo aspecto de este apartado, relativo a
24 hechos delictuosos cometidos en el territorio de una de las Partes del Tratado de
25 Extradición contra ciudadanos de la otra Parte, el mismo Tratado contiene



excepciones que deben ser tomadas en cuenta para decidir la cuestión. En esto la lectura natural del Artículo IV obliga a meditar sobre sus alcances, por lo cual su transcripción completa resulta pertinente.

"Artículo IV.- Queda entendido que las estipulaciones del presente Tratado no obligan a ninguna de las dos Altas Partes Contratantes a entregar a la otra sus propios ciudadanos o súbditos, teniendo en cuenta que, para este efecto, no serán considerados como guatemaltecos o españoles los extranjeros naturalizados en Guatemala o en España, si el delito hubiere sido cometido con anterioridad a la fecha de su naturalización."

La otra posibilidad exceptiva es la prevista en el Artículo III del Tratado de Extradición, que dispone los casos en que no habrá lugar a extradición, entre las que se regula en el inciso 4º *"Por delitos políticos o por hechos que tengan conexión con ellos"*. Enseguida contiene una previsión respecto de delitos de lesa majestad que no es relevante para este estudio.

La teoría de que los Estados no entregan a sus propios ciudadanos a la justicia extranjera ha sido muy extendida y tiene suficientes expresiones en el Derecho comparado. Al respecto la ley española de veintiuno (21) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), en su artículo 3, dispone:

"1. No se concederá la extradición de españoles, ni de los extranjeros por delitos que corresponda conocer a los Tribunales Españoles, según el Ordenamiento Nacional. La cualidad de nacional será apreciada por el tribunal competente para conocer de la extradición en el momento de la decisión sobre la misma, con arreglo a los preceptos correspondientes del Ordenamiento Jurídico Español, y siempre que no fuere adquirida con el fraudulento propósito de hacer imposible la extradición."

2. Cuando proceda denegar la extradición por el motivo previsto en el

1 apartado anterior, si el Estado en que se hayan ejecutado los hechos así lo pidiere el
2 Gobierno Español dará cuenta del hecho que motivó la demanda al Ministerio Fiscal a fin
3 de que proceda judicialmente, en su caso, contra el reclamado. Si así se acordare,
4 solicitará del Estado requeriente que remita las actuaciones practicadas o copia de las
5 mismas para continuar el procedimiento penal en España.

6 3. Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio del país
7 que solicite la extradición, esta podrá ser denegada si la Legislación Española no
8 autorizare la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de España."

9 Si bien esta protección legal del Reino de España respecto de sus
10 nacionales, e incluso extranjeros, por delitos que corresponda conocer a los
11 Tribunales españoles según su Ordenamiento, ha sido matizada por su Tribunal
12 Constitucional con relación a hechos sucedidos fuera de su territorio, recordando
13 la aplicación preferente de los tratados internacionales sobre la Ley de extradición
14 pasiva y condicionando a la calificación de dicho Reino respecto de la
15 observancia en el país solicitante de los Derechos Humanos (situación que
16 calificaría el solicitado juzgando no a personas sino a Estados) y, recalcando aun
17 más, la existencia de un control supranacional para los nacionales de los países
18 firmantes del Convenio de Roma, sometidos voluntariamente a la jurisdicción del
19 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. [Sentencia Tribunal Constitucional del
20 Reino de España 87/2000, fundamento jurídico 5, citada en la Sentencia
21 181/2004, fundamento jurídico 10].

22 La precitada sentencia 181/2004, invocando las 87/2000 y 101/2000,
23 reitera, "que la Constitución española, a diferencia de otros textos constitucionales, no
24 prohíbe expresamente la extradición de nacionales" afirmación que revela que
25 tampoco la permite expresamente, lo que reviste de legitimidad constitucional a la



16 mencionada Ley de Extradición Pasiva. Esta cuestión no ocurriría en el
17 ordenamiento superior guatemalteco que en su artículo 27, párrafo tercero, en las
18 condiciones ahí definidas, sí la permitiría, entendiéndose que se trataría de
19 hechos sucedidos en territorio extranjero o aquellos de lesa humanidad o
20 contrarios al Derecho Internacional sometidos a una jurisdicción supranacional de
21 la cual el mismo país fuere parte.

22 Lo cierto de este cotejo, es que el Reino de España exige la entrega
23 de nacionales de Guatemala en condiciones que no garantiza ninguna
24 reciprocidad (la entrega de españoles por delitos cometidos en el territorio de
25 España) tanto por el mandato de su Ley de Extradición Pasiva como por las
26 cautelas interpretativas de su máximo tribunal de jurisdicción constitucional, entre
27 éstas que no existe un órgano contralor supranacional al que ambos pertenezcan
28 en común, pues ni Guatemala puede acceder al Tribunal Europeo de Derechos
29 Humanos ni España a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

30 En cuanto a la naturaleza de los delitos atribuidos a guatemaltecos
31 ocurridos en la sede diplomática del Reino de España y de los sucedidos a
32 ciudadanos españoles (todos casos cubiertos por el calificativo de "supuestos" o
33 "probables" hasta que no haya un pronunciamiento judicial definitivo) son
34 indudablemente conexos con delitos de tipo político, como los encuadra el Auto
35 de veintisiete (27) de marzo de dos mil (2000) del Juzgado Central de instrucción
36 número uno (1) de la Audiencia Nacional del Reino de España (Diligencias
37 previas trescientos treinta y uno / noventa y nueve [331/99]) que en su apartado
38 **Primero**, tercer párrafo, afirma textualmente: "*Los hechos objeto de la denuncia se*
39 *circunscriben cronológicamente al tiempo de 'guerra que azotó durante treinta y seis años*
40 *a Guatemala' y más concretamente, al período investigado por la 'Comisión para el*

1 *Esclarecimiento Histórico' (CEH), creada en el ámbito de los Acuerdos de Paz de Oslo en*
2 *1994, período que comprende los años 1962 a 1996".*

3 Es del caso reparar la afirmación de la Sala *a quo* de que la sede
4 diplomática es considerada "territorio" del país acreditante –idea que sustenta en
5 una cita interpósita del tratadista Alfred Verdross-, rectificándole que la
6 inviolabilidad de los locales de la misión y de los agentes diplomáticos, reconocida
7 por la costumbre y por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no
8 implica cesión alguna de orden territorial. Para el caso, suficiente sería citar
9 directamente al autor mencionado, quien al referirse a la extraterritorialidad
10 derivada de la llamada "*franchise de l'hotel*" dice: "*Tampoco estos edificios se*
11 *consideran fuera del Estado en cuyo territorio se encuentran. No son tierra extranjera,*
12 *sino territorio nacional.*" [Derecho Internacional Público, Aguilar, Madrid, 1957,
13 página 227]

14 Resulta evidente que el Reino de España, por medio de sus órganos
15 judiciales, no tiene competencia para esgrimir el Tratado de Extradición para
16 solicitar la entrega de ciudadanos guatemaltecos de origen, residentes en el país,
17 por supuestos delitos cometidos en territorio guatemalteco en violación del
18 régimen jurídico penal guatemalteco. En cuanto a la solicitud de extradición para
19 juzgar en jurisdicción española a ciudadanos guatemaltecos por supuestos delitos
20 cometidos contra súbditos del Reino de España, no resulta viable a la luz de la
21 interpretación del Artículo IV del Tratado de Extradición y tampoco conforme el
22 párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de la República de
23 Guatemala, tanto por la conexidad de los hechos imputados con delitos políticos,
24 como porque la jurisdicción interna del Reino de España no tiene el carácter de un
25 Tribunal Internacional legitimado por el Derecho Internacional ni se le ha



6 encomendado por un órgano legítimo (Asamblea General y/o Consejo de
7 Seguridad de Naciones Unidas) que se atribuya competencia al respecto.

8 En cuanto a la competencia que su ley interna establece para conocer de
9 delitos de lesa humanidad (que no estaban tipificados en la época de suscripción
10 del Tratado de Extradición) y que configura la moderna "Jurisdicción Universal"
11 decretada unilateralmente, se hará la consideración del caso en esta sentencia.

12 - V -

13 El amparo solicitado ante la jurisdicción constitucional guatemalteca, y del
14 cual conoce esta Corte por apelación de sentencia, tiene origen en la solicitud del
15 Reino de España para extraditar a los postulantes a efecto de ser juzgados por
16 sus tribunales. La competencia asumida por la jurisdicción española para conocer
17 de la denuncia se materializó luego de varias incidencias que culminaron con la
18 Sentencia 237/2005 de veintiséis (26) de septiembre de dos mil cinco (2005)
19 emitida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que conoció en los
20 amparos 1744-2003, 1755-2003 y 1773-2003 (acumulados) en los cuales figuran
21 como promoventes Rigoberta Menchú Tum y otras personas individuales, la
22 Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Asociación de Derechos
23 Humanos de España, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Contra la
24 Tortura, la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, la Asociación Centro
25 de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, el Comité
26 Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y la Asociación Argentina Pro-Derechos
27 Humanos de Madrid.

28 Dichos amparos impugnaron la Sentencia del Tribunal Supremo número
29 327/2003 de veinticinco (25) de febrero de dos mil tres (2003), que estimó
30 parcialmente el recurso de casación interpuesto con el Auto del Pleno de la Sala

1 de lo Penal de la Audiencia Nacional de trece (13) de diciembre de dos mil (2000).

2 La importancia trascendental que el caso plantea para Guatemala, justifica
3 que al dictar sentencia esta Corte analice puntualmente los fundamentos de la
4 resolución del Tribunal Constitucional del Reino de España, con el objeto de
5 encontrar identidades o diferencias conceptuales que le permitan arribar a su
6 propia decisión sobre la materia. Siendo la sentencia del Tribunal Constitucional
7 del Reino de España de carácter público, de libre circulación y de publicidad
8 abierta por ese mismo Tribunal, se tiene a la vista la versión electrónica para el
9 meritado estudio.

10 La citada Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional del Reino de
11 España contiene un capítulo primero, de Antecedentes, en el cual relata o informa
12 las incidencias procesales del caso. De dicho capítulo interesa reproducir que
13 todos los procesos ocurridos tuvieron origen en la denuncia contra determinadas
14 personas individuales de nacionalidad guatemalteca, entre las que se encuentran
15 los postulantes del amparo que hoy se conoce, por lo que la denunciante doña
16 Rigoberta Menchú Tum *"calificaba como posibles delitos de genocidio, torturas,*
17 *asesinato y detención ilegal, presuntamente perpetrados en Guatemala entre los años*
18 *1978 y 1986 por una diversidad de personas que ejercieron en dicho período funciones*
19 *públicas de carácter civil y militar. Entre los hechos relatados en la denuncia se incluía el*
20 *asalto de la Embajada de España en Guatemala en 1980, en el que fallecieron 37*
21 *personas, así como la muerte de varios sacerdotes españoles y de otras nacionalidades y*
22 *de familiares de la denunciante."*

23 Informa el capítulo I que el "Ministerio Público interesó el 13 de enero de 2000
24 el archivo de las actuaciones al no estimar competente a la Jurisdicción española" y que
25 dicha objeción no fue aceptada por el Juez Central número 1, quien mediante



Auto de veintisiete (27) de marzo de dos mil (2000) "desestimó tal pretensión y declaró su competencia, tuvo por dirigido el procedimiento contra los denunciados, admitiendo las querellas interpuestas, y ordenó practicar diversas diligencias...". En ese apartado el Tribunal Constitucional resume: "En síntesis, y entre otros argumentos que no son relevantes a los efectos del recurso de amparo, el Instructor basaba su decisión en que, presentando los hechos 'la luminosa apariencia de genocidas', puesto que se trata del exterminio del pueblo maya 'en su pretextada calidad de favorecedor o encubridor -y aun originador- de la insurgencia o la revolución', conforme al apartado 4 a) en relación con el 2 c) del art. 23, y a los arts. 65.1 y 88, todos de la LOPJ, el Juez era competente para conocer de este delito, en que quedaban integrados los otros que se denunciaban." En otro pasaje refiere que en el auto en que se declara su competencia, dicho Juez sostiene que los Estados en que se ejecutan este tipo de hechos no pueden aducir injerencias en su soberanía, pues los Magistrados del Estado que asume la competencia represiva hacen valer la propia, en función de la preservación de intereses comunes de la Humanidad civilizada; no tratándose por tanto de eludir la jurisdicción territorial de Guatemala, que "no es excluyente, pues en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz debe ser suplida por tribunales que - como los españoles- sustentan la extraterritorialidad de su jurisdicción en el principio legal -interno e internacional- de persecución universal (...) sin olvidar que el art. 6 del Convenio de 1948 impone la subsidiaridad de la jurisdicción española respecto de la del Estado en que ocurrieron los repetidos hechos".

Sigue la secuencia descriptiva informando que el Ministerio Público interpuso "recurso de reforma" que fue desestimado por el Tribunal recurrido, por lo que, contra esta resolución desestimatoria, el Fiscal formuló apelación de la que conoció el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta Sala

1 otorgó la apelación (auto de trece de diciembre de dos mil dos) declarando "que
2 no procede el ejercicio en este momento de la jurisdicción penal española para la
3 persecución de los referidos hechos, debiendo el instructor archivar las diligencias
4 previas."

5 Prosiguiendo la relación de antecedentes, se describe que frente al auto
6 anteriormente mencionado, las partes acusadoras interpusieron recurso de
7 casación que fue resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo, que examinó y
8 rechazó los motivos del recurso. Es contra esta resolución que se interpusieron
9 los amparos que dieron origen a la Sentencia del Tribunal Constitucional
10 237/2005 de veintiséis (26) de septiembre de dos mil cinco (2005), y que es la que
11 abrió la posibilidad para que la Audiencia Nacional del Reino de España planteara
12 la extradición de ciudadanos guatemaltecos de origen por hechos ocurridos en el
13 territorio guatemalteco y, por ello, debe ser comentada en sus fundamentos
14 jurídicos, para determinar -al decidir sobre el amparo examinado- acerca de su
15 validez para sustraer de la competencia nacional el conocimiento de los hechos
16 denunciados ante la justicia española, y asimismo si las autoridades
17 guatemaltecas reclamadas en el amparo han actuado conforme a Derecho.

18 En II. Fundamentos jurídicos, el numeral 1 ubica las cuestiones planteadas
19 en los amparos relacionados. Así sitúa el "núcleo" de la controversia indicando
20 que "se proyecta sobre la interpretación restrictiva que, si bien en virtud de los
21 argumentos diversos, ambos órganos judiciales efectúan sobre el art. 23.4 de la Ley
22 Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el criterio de competencia jurisdiccional penal allí
23 establecido, referido al principio de la denominada jurisdicción universal, con la
24 consecuencia de negar, en todo o en parte, la competencia de los Tribunales españoles
25 para la persecución y enjuiciamiento de los hechos objeto de las denuncias..." De lo



resumido, el Tribunal Constitucional del Reino de España, ubica como vulneraciones denunciadas: **a)** el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente (a') de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho como (a'') el derecho de acceso a la jurisdicción; **b)** haber incurrido la autoridad reclamada al conocer de la casación en una *reformatio in peius*; **c)** el derecho al juez predeterminado por la ley; **d)** derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; y **e)** derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

Siempre ubicados en los Fundamentos Jurídicos, la Sentencia del Tribunal Constitucional del Reino de España, en numeral 2, indica el método de examen de las diversas quejas formuladas, comenzando con el de aquellas de las que pueda derivarse una retroacción de actuaciones, con el fin de salvaguardar el carácter subsidiario del proceso de amparo. Por ello, indica que, en concreto, comenzará por la alegación relativa a la *"vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva regulado en el art. 24.1 CE [Constitución Española] en su vertiente de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho y de derecho de acceso a la jurisdicción"*. La sentencia ocupa todo el numeral 2 para analizar en conjunto, desde el marco de la jurisprudencia consolidada de ese mismo Tribunal, el indicado derecho a la tutela judicial efectiva. Así, con más o menos unas mil cien palabras, realiza un documentado repaso de las notas esenciales que derivan del principio *pro actione*. Al respecto, por tratarse de un marco de doctrina legal universalmente admitida por la justicia constitucional y ampliamente conocida y aplicada por la jurisdicción guatemalteca, lo indicado en el numeral 2, no tiene discusión.

En el numeral 3 del capítulo de Fundamentos Jurídicos, la sentencia comentada sintetiza que *"el núcleo de la controversia radica en la interpretación, abiertamente restrictiva, que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han*

1 efectuado de la regla de atribución de competencia incluida en el art. 23.4 LOPJ, con la
2 consecuencia de negar la jurisdicción de los Tribunales españoles para el enjuiciamiento
3 de hechos presuntamente calificados como genocidio, terrorismo y torturas."

4 En su análisis, y por lo que interesa en el examen del caso planteado
5 ante esta Corte, el indicado Tribunal Constitucional del Reino de España señala
6 que la Audiencia Nacional se ha inclinado por el principio de subsidiaridad como
7 preferente respecto del de complementariedad para determinar la jurisdicción de
8 la justicia española respecto de ciertos hechos delictuosos extraterritoriales.
9 Discurre respecto de la diferente perspectiva que puede haber en la materia y
10 asienta "Desde el prisma de acceso a la jurisdicción tal reducción teleológica [la de la
11 Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo españoles] se alejaría del principio
12 hermenéutico pro actione y conducirla a una aplicación del Derecho rigorista y
13 desproporcionada contraria al principio consagrado en el art. 24.1 CE [Constitución
14 Española]".

15 En el numeral 4 de los Fundamentos Jurídicos, el Tribunal Constitucional
16 español coteja la tesis contenida en el auto de la Audiencia Nacional que
17 reconociendo la existencia de la jurisdicción territorial y la del tribunal penal
18 internacional, encuentra que debe entenderse que el artículo VI del Convenio
19 sobre el genocidio "impone" la subsidiaridad de actuación de jurisdicciones
20 distintas a las que contempla. El indicado Tribunal Constitucional, aunque admite
21 la validez teórica del principio del *locus delicti* ("por razones de peso, tanto
22 procesales como político-criminales") asume que no habría de considerarse que el
23 principio de subsidiaridad constituya una regla opuesta o divergente con el de
24 concurrencia. Reconoce, "en aras de evitar una eventual duplicidad de procesos y la
25 vulneración de la interdicción del principio *ne bis in idem*", que "resulta imprescindible la



Handwritten signature or initials.

introducción de alguna regla de prioridad", otorgándola "a la jurisdicción del Estado donde el delito fue cometido."

En su análisis, contenido en el señalado numeral 4, indica los casos de abstención de la jurisdicción subsidiaria, que podría ocurrir: a) si hubiere iniciado un procedimiento en la jurisdicción territorial o en el Tribunal internacional; o, b) cuando resultara previsible la efectiva persecución de los delitos, constitutivos de genocidio, en un plazo próximo. Respecto de la apreciación de la Audiencia Nacional de que la jurisdicción extraterritorial pueda activarse cuando se aportara, de oficio o por la parte actora, "indicios serios y razonables de la inactividad judicial que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad para la persecución efectiva de los crímenes", tilda de rigorista esa exigencia probatoria de la abstención o inactividad para la persecución, fuera voluntaria o por incapacidad del Estado obligado. Comenta las alegaciones del Fiscal sobre que pedir al actor prueba de hechos negativos enfrentaría "la necesidad de acometer una tarea de imposible cumplimiento, a efectuar una *probatio diabolica*" (énfasis propio). Este aspecto lo liga con la regla hermenéutica *pro actione* [que debería favorecer a la parte actora o denunciante].

En cuanto lo anteriormente resumido, esta Corte no tiene mayor comentario que hacer, incluida la apreciación contenida en la Sentencia de mérito de que la jurisdicción universal que se atribuye el Reino de España tenga sustento en el artículo 24.1 de su Ley Orgánica del Poder Judicial "y en el Convenio sobre genocidio". Lo primero, porque es cuestión muy digna y respetable de su soberanía decidirlo; lo segundo, porque el hecho de que un convenio internacional no prohíba, tampoco faculta a ejercer una jurisdicción unilateral que se pretenda

1 que no han dado su consentimiento al respecto. En todo caso, semejante a los
2 criterios de ejercicio del poder al interior de los Estados, de que éstos sólo tienen
3 las facultades expresamente conferidas por los titulares de su soberanía, en
4 definitiva, por su propio pueblo; en materia internacional es evidente que sólo las
5 tendrían las que expresamente les encomienden o le reconozcan los Estados
6 obligados, bien fuera por convenciones bilaterales, multilaterales o universales. El
7 rechazo de importantes sectores de opinión internacional a la Ley Helms Burton
8 de los Estados Unidos de América puede ilustrar el concepto.

9 En el numeral 5 del capítulo II, Fundamentos Jurídicos, de la Sentencia
10 237/2005 repetidamente citada, el Tribunal Constitucional entra al análisis de la
11 de casación, impugnada por los amparos del caso. Luego de su correspondiente
12 descripción, resume: *"De ese modo la conclusión a que llega el Tribunal Supremo sería*
13 *que, sólo cuando viniera expresamente autorizado en el Derecho convencional el recurso*
14 *a la jurisdicción universal, resultaría ésta legítima y aplicable en virtud del art. 96 CE*
15 *[Constitución Española] como del art. 27 del Convenio sobre el Derecho de los tratados,*
16 *según el cual lo acordado en los tratados internacionales no puede ser incumplido por la*
17 *legislación interna de cada Estado."* Califica el Tribunal Constitucional la
18 interpretación de la recurrida de extremadamente rigorista y entonces asume su
19 propia intelección de la materia. Según su percepción, del hecho de que el
20 Convenio contra el genocidio guarde silencio respecto de la *"jurisdicción*
21 *internacional extraterritorial"* no puede inferirse que la prohíba. Asegura, desde
22 esta posición, que el Convenio "deja abierta a los Estados firmantes la posibilidad de
23 establecer ulteriores mecanismos de persecución del genocidio (...) máxime cuando de la
24 finalidad que inspira el Convenio sobre genocidio se desprendería antes una obligación
25 de intervención que, por el contrario, una prohibición de intervención."



6 Con relación al establecimiento del Reino de España de una "jurisdicción
7 internacional extraterritorial" esta Corte no puede formular objeción alguna, en
8 tanto, ni siquiera por la vía del reproche sería válida una intervención en los
9 asuntos propios de la soberanía política española. Es claro que España, como
0 cualquier otro Estado, puede introducir los órganos que a su conveniencia
1 determine el ejercicio de su poder político. De lo que no debe quedar duda es de
2 la posibilidad de que otro Estado, también soberano e independiente, se niegue a
3 someterse a una jurisdicción que no ha sido reconocida legítimamente por la
4 comunidad internacional, fuera por convenios o tratados bilaterales, regionales o
5 universales. Por caso, no puede negarse el valor imperativo que tendría una
6 jurisdicción internacional como el Tribunal penal internacional, la Corte
7 Interamericana de Derechos Humanos o los tribunales penales establecidos *ad*
8 *hoc* por Naciones Unidas, en las condiciones de cada uno de dichos órganos de
9 la comunidad internacional.

10 Esta cuestión se torna de principal importancia en tanto la relacionada
11 sentencia 237/2005 justifica la intervención de un Estado extraterritorial para
12 conocer hechos como los denunciados, de haber "*indicios serios y razonables de*
13 *la inactividad que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad*
14 *para la persecución efectiva de los crímenes*". Esto es, que un Estado, de manera
15 unilateral, pueda hacer juicio sobre otro Estado acerca de los elementos de
16 enorme significación de soberanía (e incluso de honor) nacional: *voluntad* para
17 juzgar y castigar crímenes atroces, como podría ser, según las citadas palabras
18 del Juez Instructor español, "**el exterminio del pueblo maya**" [parágrafo
19 segundo de numeral 2, b, del capítulo I. Antecedentes], o capacidad para hacer
20 funcionar los órganos jurisdiccionales del país. En ambos casos, implicaría un

1 juicio de valor de un Estado respecto de otro en cuanto a su moralidad política o
2 su aptitud para el ejercicio de sus funciones fundamentales, como son las de
3 impartir justicia. De tal manera que en ambas situaciones, tanto del llamado *rogue*
4 *state* (Estado canalla) o del Estado fallido, le fuera imponible la tutela exterior, sin
5 que mediara una determinación del Consejo de Seguridad o de la Asamblea
6 General de las Naciones Unidas. De esto habrá de ocuparse esta Sentencia.

7 En numeral 6 del capítulo relacionado, el Tribunal Constitucional español,
8 en la indicada sentencia 237/2005, realiza su análisis cotejando la tesis del
9 Tribunal Supremo, que al conocer de la casación antes referida, sostuvo que el
10 Convenio sobre genocidio no reconoce la jurisdicción universal y, por ello, su
11 "asunción unilateral por el Derecho interno debe, entonces, venir limitada por otros
12 principios, en virtud de lo que viene siendo regla en la costumbre internacional". En su
13 recensión del fallo de casación, menciona los llamados "vínculos de conexión"
14 que la autoridad reclamada en los amparos tuvo como posibles para justificar la
15 jurisdicción universal, tales que el presunto autor del delito se halle en territorio
16 español, que las víctimas sean de nacionalidad española, o bien que exista otro
17 punto de conexión directo con intereses nacionales. Que la conclusión del
18 recurrido es que "no correspondiéndole a cada Estado en particular ocuparse
19 unilateralmente de estabilizar el orden, el ejercicio de la competencia universal sólo será
20 legítimo cuando exista el citado punto de conexión".

21 El tribunal de amparo cuestionó dicha tesis, indicando no compartir la
22 interpretación que se había hecho de algunas sentencias de tribunales de
23 terceros Estados (alemán, belga) o internacionales (La Haya). Afirmar el Tribunal
24 Constitucional que "existen multitud de precedentes en Derecho internacional que
25 avalarían la postura contraria a la seguida por el Tribunal Supremo en la materia",



aunque no los haya enumerado. Igualmente, agrega en apoyo de su tesis que valida la jurisdicción con alcances universales, o universal, que el Reino de España asume en su Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 23.4), que *"la ley española no es la única legislación nacional que incorpora un principio de jurisdicción universal sin vinculación a intereses nacionales"*, citando al respecto otros países europeo-occidentales. Esta Corte estima que ese debate interpretativo suscitado al conocer de los amparos, resulta interesante e ilustrativo. Sin embargo, en lo que concierne a los nacionales de Guatemala, que residen en su territorio y están sometidos por el orden jurídico interno (artículo 153 de la Constitución Política de la República de Guatemala), dicha discusión, en la que el Estado guatemalteco no fue parte, no puede ni debe afectarles en tanto se produce dentro y exclusivamente en el ámbito de la soberanía de otro país, que, por sí mismo, no puede representar una voluntad jurídica obligatoria que solamente se le reconoce a las fuentes legítimas del Derecho Internacional (artículo 149 ibídem). Al respecto, bien vale observar el principio *res inter alios actae*.

En numeral 7 de los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional del Reino de España que, según se anotó en ésta, sirvió de base para que la Audiencia Nacional de dicho país quedara habilitada, en lo interno, para activar la denuncia formulada contra varias personas de origen y nacionalidad guatemaltecos por hechos sucedidos en Guatemala, que el juez instructor calificó, entre otros, como genocidio (*"puesto que se trata del exterminio del pueblo maya"*) [el énfasis es agregado], prosigue la confrontación interpretativa con la sentencia que en casación había resuelto el Tribunal Supremo, Sala Segunda. En apoyo de su tesis el tribunal de amparo rebate el análisis que la recurrida hizo respecto de *"un listado de tratados internacionales relativos a la*

1 *persecución de delitos relevantes para la comunidad internacional suscritos por España*
2 *con la finalidad de mostrar que, de una parte, en ninguno de esos tratados se establece*
3 *de forma expresa la jurisdicción universal, y que, de otra, en ellos se establece como*
4 *forma de colaboración la clásica fórmula aut dedere aut iudicare; es decir, los Estados*
5 *tendrán la obligación de juzgar a los responsables de delitos comprendidos en los*
6 *tratados cuando se encuentren en su territorio y no se acceda a la extradición solicitada*
7 *por algún otro Estado con competencia obligatoria según las disposiciones del respectivo*
8 *tratado." Acto seguido, el Tribunal Constitucional indicado llega, según su propio*
9 *estudio, a una convicción distinta a la del de casación, y de ahí surge el*
10 *reconocimiento de competencia que el Reino de España asume, en tal caso, para*
11 *conocer de los hechos denunciados ante su jurisdicción interna. Como se ha*
12 *comentado en el apartado anterior, la discusión interna ocurrida entre los altos*
13 *tribunales españoles sólo es relevante para los mismos, sin que pueda la decisión*
14 *afectar de forma vinculante a un Estado soberano e independiente, que de toda la*
15 *cuestión fue absolutamente ajeno. En particular, porque para ningún Estado que*
16 *pertenezca a la comunidad civilizada de naciones puede ser aceptable la fórmula*
17 *de la sentencia 237/2005 que sustenta, en el orden internacional, lo que ninguna*
18 *legislación tolera en el interno: de que el Estado puede hacer todo lo que no le*
19 *esté expresamente prohibido, comparándose en esto al ejercicio de la libertad*
20 *individual.*

21 *Esta Corte guatemalteca ha sostenido que, en efecto, la persona humana*
22 *puede hacer todo lo que no le esté prohibido, a diferencia del poder público que*
23 *sólo puede hacer aquello para lo que esté expresamente facultado. La tesis del*
24 *Tribunal Constitucional de que "ni en el Convenio sobre el genocidio, como ya se*
25 *afirmó, ni en los Tratados que menciona la sentencia impugnada, se contempla*



prohibición alguna del ejercicio de la jurisdicción universal unilateral que pudiera considerarse incumplida por lo dispuesto en la Ley española.", no puede ser reconocida por esta Corte guatemalteca, dado que de ninguna manera se ha demostrado que la llamada "jurisdicción universal unilateral" le haya sido encomendada a España por la comunidad "universal" para que la represente con los poderes sustantivos de juzgar y ejecutar lo juzgado que constituye, desde los clásicos, uno de los atributos indelegables de la sociedad jurídica y políticamente organizada. Los únicos tribunales con membrete de universalidad serán los constituidos dentro del Derecho Internacional.

El relacionado apartado 7 se refiere al vínculo de conexión que ha señalado la sentencia de casación, de encontrarse los sindicatos en territorio español para hacer competente su jurisdicción para conocer de delitos de genocidio, aunque los hechos hubiesen ocurrido fuera de sus fronteras. El Tribunal constitucional español no lo admite como válido y refuerza de nuevo su argumento con la invocación del principio *pro actione*. Este principio general, que reforzó la sentencia 237/2005 con amplitud doctrinaria en su Fundamento Jurídico 2, enseña un lado de la medalla, que es el sustento teórico decantado a cualquier demanda de tutela judicial; por el otro, aunque no sea explícito, reivindica para el Reino, con carácter universal, el *ius puniendi* que, a lo interno, caracteriza el poder o *imperii* del Estado respecto de sus propios gobernados o de sus súbditos.

En numeral 8 del capítulo de Fundamentos Jurídicos, el Tribunal Constitucional español acota otros vínculos de conexión que para el Tribunal Supremo que dictó la casación recurrida en los amparos, habilitaría la jurisdicción que el Reino se atribuye para conocer sobre hechos supuestamente delictuosos ocurridos fuera de su territorio: el de personalidad pasiva (nacionalidad española

1 de las víctimas) y la concurrencia de otros intereses españoles relevantes. El
2 primero de dichos órganos de justicia no comparte el criterio del examinado y lo
3 rebate con sus propios argumentos, los cuales lo conducen a sostener la validez
4 de la jurisdicción universal que conecta directamente con el derecho de acceso a
5 la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución
6 Española.

7 Respetables, como se ha insistido, las orientaciones interpretativas del
8 meritado Tribunal Constitucional, sus consideraciones en cuanto a su propia
9 soberanía no deben ser cuestionadas por la justicia constitucional guatemalteca,
10 frente a la cual aquellas carecen de trascendencia jurídica. Aunque no habría
11 ninguna razón para desconocer que la "tutela judicial" española, en su ámbito,
12 pudiera ser *efectiva*, en el caso concreto, la misma está negándose en uno de sus
13 elementos sustanciales: que ésta sea además *legal*.

14 Al respecto, la pregunta a formular es "de quién y de qué depende la
15 potestad jurisdiccional", siendo la respuesta que es "conferida por el Estado y
16 delegada por éste a los jueces". De suerte que la proclamación contenida en el
17 artículo 117.1 de la Constitución española: "La justicia emana del pueblo y se
18 administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados..." no tiene ninguna
19 validez en el territorio soberano guatemalteco porque en la materia de la que se
20 trata, no pueden ser imperativas normas que obligaran a otros Estados
21 independientes a que su jurisdicción legítima se someta a otra decretada
22 unilateralmente sin haberse seguido el curso, codificado o por costumbre
23 universalmente reconocida, del Derecho Internacional. De suerte que, en el caso
24 *sub litis*, frente a la pretensión de validez de normas de derecho interno de un
25 país son oponibles las normas de derecho interno de otro país. En la situación



planteada, son atinentes, como mínimo, los preceptos constitucionales contenidos en los artículos que se indican a continuación: 2º (deber del Estado de garantizar a sus habitantes ... la justicia, la seguridad...), 6º (detención o aprisionamiento ... sólo de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente), 12 (garantía del debido proceso en su vertiente de derecho al juez legal o natural de la persona), 140 (Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano), 142 inciso a) (ámbito territorial de soberanía), 149 (Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales...), 152 (ejercicio del poder público en representación del pueblo), 153 (imperio de la ley que se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República), 154 (indelegabilidad de la función pública, salvo casos señalados por la ley), y 203 (normación de la potestad judicial, que corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establezca).

En el siguiente numeral (9) de *Fundamentos Jurídicos* de la sentencia 237/2005, el Tribunal Constitucional rebate la tesis del que conoció la casación impugnada, relativa a la viabilidad de juzgar el caso "cuando la víctima fuera de nacionalidad española y, además que la conducta viniera motivada por la finalidad de destruir el grupo nacional español". También refuta al "criterio del interés nacional" respecto del cual también afirma que "no resulta cabalmente conciliable con el fundamento de la jurisdicción universal". Refuerza su tesis proclamando: "La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad

1 *internacional en su conjunto."*

2 Los distintos enfoques que sobre la materia hayan sustentado los altos
3 tribunales españoles constituyen pronunciamientos respetables dentro del ámbito
4 de su propia soberanía y de sus propios intereses. Por ello, a la Corte
5 guatemalteca que resuelve no concierne propiamente tomar partido por uno o por
6 otro criterio, pues, como se ha dicho, conforme al Derecho Internacional las leyes
7 y las sentencias del Reino español no tienen más ámbito que el que la propia
8 comunidad de naciones puede reconocerles, dentro de las más estrictas
9 previsiones del orden internacional, sustentado en sus elementos fundamentales:
10 el respeto, la no injerencia, la igualdad jurídica y la solución pacífica de
11 controversias.

12 Desde luego, si en algo puede haber una mínima coincidencia para
13 compartir, se encuentra en la discrepancia respecto de la posibilidad de sugerir
14 como fundamento a la llamada jurisdicción universal (asumida de manera
15 unilateral) el "criterio de interés nacional", con el riesgo que lo mueva el deseo de
16 poder mundial o el de gloria nacional, (La idea está tomada de John Rawls, *Teoría*
17 *de la Justicia*, FCE, México, 1995, página 345), siendo cuestión que puede
18 volverse muy sensible cuando la asume un Estado que tiene importantes
19 intereses sobre industrias estratégicas del otro. Estas circunstancias, cambiando
20 lo que haya que cambiar, motivaron el reproche también universal a decisiones
21 unilaterales (v.g. las leyes Helms-Burton y Torricelli) que ampliaban el ámbito
22 territorial de jurisdicción de un Estado. Sin embargo, no debe haber duda respecto
23 de que la jurisdicción que el Reino de España se atribuye está encaminada al fin
24 de la justicia; como tampoco podrá quedar reparo alguno que a la jurisdicción
25 guatemalteca también la inspire el mismo propósito. La cuestión que ha venido



discutiéndose radica esencialmente sobre el principio de legalidad, que si tiene fuertes ataduras garantistas en el Derecho interno, más rigurosas y exigentes deben serlo en lo internacional, puesto que siendo el poder necesario y ventajoso para todos, ha de ser delegado con respeto a la igualdad en donde cada persona esté legítimamente representada. Guatemala no ha acreditado representación para encomendarle a otro país la potestad judicial, pues este tipo de atribución jurisdiccional la ha reconocido expresamente a los órganos internacionales de justicia, de cuyos instrumentos constitutivos se ha hecho parte (o su adhesión está en trámite de aprobación congresal), y a los creados por la Organización de Naciones Unidas, a la que pertenece desde su fundación.

Finalmente, el numeral 10 del capítulo Fundamentos Jurídicos de la comentada sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional del Reino de España, concluye sosteniendo que *"tanto el Auto de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000 como la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los demandantes en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por lo que procede otorgar el amparo y, en consecuencia, anular las citadas resoluciones y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto de la Audiencia Nacional anulado..."*

En su parte resolutive, el Tribunal decidió: *"Otorgar el amparo solicitado por doña Rigoberta Menchú Tum y otros, por la Asociación de Derechos Humanos de España y por la Asociación Libre de Abogados y otros, y en consecuencia: 1º. Declarar que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), de los recurrentes. 2º. Restablecer a éstos en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular el Auto del Pleno de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003*

1 retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento
2 del Auto de la Audiencia Nacional a fin de que se dicte nueva resolución respetuosa con
3 el derecho fundamental vulnerado.”

4 Tal como se señaló anteriormente, esta Corte de Constitucionalidad se ha
5 visto en la necesidad de informarse de los fundamentos jurídicos que tienen
6 supremacía en el orden constitucional español, por la naturaleza del órgano que
7 los sustentó, y que fueron los que dieron curso a la atribución de competencia de
8 los tribunales ordinarios del Reino de España para someter a su jurisdicción a
9 ciudadanos guatemaltecos de origen y actualmente residentes en el territorio de
10 esta República, por hechos (tenidos como supuestamente delictivos por esos
11 tribunales) ocurridos en Guatemala. Esta Corte, aunque respeta la soberanía de
12 los tribunales españoles para tomar sus decisiones, estima que se opone a su
13 pretensión de extender competencia de su jurisdicción interna al ámbito territorial
14 de esta nación independiente, tanto por lo ya considerado como por las
15 valoraciones y razonamientos que continúan en esta resolución, que proceden del
16 igualmente máximo intérprete de la Constitución Política de la República de
17 Guatemala.

18 - VI -

19 El enfoque que la Corte de Constitucionalidad sustenta con relación a la
20 exigencia del país requirente de extradición a que se refieren los Antecedentes,
21 aparte de tener base en los razonamientos de orden jurídico expresados en los
22 párrafos anteriores, debe ampliarse con apreciaciones vinculadas a sucesos
23 ocurridos en Guatemala y Centro América, que constituyeron un amplio y
24 prolongado conflicto armado (desatado por factores endógenos y exógenos) que
25 finalizó con actos de trascendencia jurídica nacional e internacional. Importa



ubicarlos para determinar el escenario de los hechos objeto de denuncia ante la jurisdicción española a que se refiere el caso que aquí se examina.

En este estudio de elementos factuales que tienen naturaleza política e histórica, el Tribunal ha de cuidar de sustentar sus apreciaciones desde el enfoque estrictamente jurídico, sin permitir que elementos emotivos influyan en el análisis.

El siete (7) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1987), en la ciudad de Guatemala, fue firmado el Acuerdo de Esquipulas II por los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin duda que para la comprensión de los fenómenos políticos ocurridos en la región centroamericana, la lectura de éste y otros documentos semejantes es obligada en su integridad. En esta Sentencia, por sus delimitaciones técnicas, bastará reproducir algunos de los elementos esenciales del indicado Acuerdo, enmarcado como *"Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica."*

En primer término, se enuncian los propósitos de la voluntad política manifestada por dichos gobernantes, entre los cuales destacan: "Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica" / "...luchar por la paz y erradicar la guerra" / "Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores." [Pedir] "respeto y ayuda a la comunidad internacional para [nuestros] esfuerzos". En seguida determina un procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, contenido en varios aspectos y etapas que se cubrieron en un plazo relativamente corto, comparado con experiencias en otras latitudes del mundo y con la intensidad que el conflicto armado había alcanzado en la época. Durante diez años se produjeron efectos de

1 cumplimiento en cuanto al cese del fuego en tres países, incluyendo en estos a
2 Guatemala, que llegó a firmar los acuerdos de paz de veintinueve (29) de
3 diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

4 El Acuerdo de Esquipulas II fue acompañado por la comunidad
5 internacional, que lo reconoció como instrumento viable para lograr los propósitos
6 de paz y justicia en la región, y por ello el diálogo abierto en Guatemala tuvo el
7 aval de importantes animadores como el Grupo de Apoyo y la moderación de la
8 Organización de Naciones Unidas.

9 Dando seguimiento al Acuerdo de Esquipulas II el Organismo Ejecutivo
10 emitió el Acuerdo Gubernativo sin número de once (11) de septiembre de mil
11 novecientos ochenta y siete (1987) de creación de la Comisión Nacional de
12 Reconciliación. Por Acuerdo Gubernativo 258-92 de veintiocho (28) de abril de mil
13 novecientos noventa y dos (1992) quedó establecida la Comisión de la Paz.

14 Estas observaciones adelantan que el proceso de paz en Guatemala, tanto
15 en su elaboración como en sus resultados, no sólo fue un acontecimiento con
16 trascendencia jurídica dentro del país, sino que, además, implicó, por el principio
17 de cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, un proceso
18 abierto a la observación de la comunidad internacional que reconoció su validez.
19 Los acuerdos de paz, entonces, han sido vinculantes al interior del país y, en la
20 medida en que hayan sido apegados a sus objetivos, merecen el respeto de los
21 demás Estados.

22 Constituye un hecho evidente que la suscripción del Acuerdo
23 Centroamericano de Esquipulas II, brevemente reseñado en el apartado anterior,
24 tuvo su causa en la situación de enfrentamiento armado operado en el interior de
25 varios países y la amenaza cierta de que se extendiera a choques de un Estado



